

Los Derechos Humanos Día a Día

- Difusión de efemérides 4
- Capacitación a servidores públicos 7
- Más cerca de ti 10
- Vinculación con OSC 12

Una Muestra de lo que Hacemos

- Emisión de recomendaciones 14
- Recomendación por un caso de omisión en la protección de los derechos humanos dentro de un CERESO 20
- Recomendación por un caso de arraigo injustificado 21
- Gestoría: cumplimiento de obligaciones ciudadanas 22
- Orientación Jurídica en un caso de discriminación de género 23

Aportaciones de Interés

- Sistemas de Enjuiciamiento Penal 25
- Ariel Anastacio Cesar Robinson Manzanilla
- Perspectivas en la relación: Jurisdicción e Inteligencia emocional 32
- José Francisco Báez Corona

Lúdica

- Cuento "El capullo" 43



PRESENTACIÓN

Apreciables lectores, me es muy grato presentarles la nueva edición de *Ver tus Derechos Humanos* que recoge las inquietudes y propuestas manifestadas por ustedes para mejorar cada día más la calidad de nuestro instrumento de promoción, estudio, investigación y difusión de los derechos humanos en el estado de Veracruz.

En la **sección los derechos humanos día a día** se incluyen las distintas actividades de difusión, capacitación y vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, así como de vinculación institucional realizadas por el personal que integra este organismo, durante el período que comprende los meses de mayo a julio del año 2009.

En la **sección una muestra de lo que hacemos** encontrarán la lista de recomendaciones dirigidas a las autoridades estatales, emitidas durante el período que comprende los meses de marzo a julio del año en curso. También se incluyen dos síntesis de recomendaciones, la primera de ellas por un caso de omisión en la protección de los derechos humanos dentro de un CERESO y, la segunda, por un caso de arraigo injustificado así como la síntesis de la gestión: cumplimiento de obligaciones ciudadanas y la síntesis de una orientación jurídica en un caso de discriminación.

En la **sección aportaciones de interés** podrán consultar el artículo del Juez Ariel Anastacio César Robinson Manzanilla titulado: *Sistemas de enjuiciamiento penal* y el artículo del Dr. José Francisco Báez Corona titulado: *Perspectivas en la relación: jurisdicción e inteligencia emocional*.

Finalmente, la **sección lúdica** está inspirada en el valor del esfuerzo, con el fin de que a través de la narración de un cuento, los padres de familia y personas al cuidado de las niñas y los niños aborden la importancia de formar en ellos el sentido del esfuerzo para ser mejores ciudadanos.

Agradezco a todos su interés y la posibilidad de estar más cerca de ustedes a través de este instrumento que tiene como objetivo contribuir a la construcción de la cultura de respeto de los derechos humanos en nuestro Estado.

**Atte. M.D. Nohemí Quirasco
Hernández**



LOS DERECHOS HUMANOS DÍA A DÍA

Ver ^{los} derechos humanos

DIFUSIÓN

DE EFEMÉRIDES

En seguimiento al programa de difusión de efemérides que lleva la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante los meses de junio, julio y agosto se conmemoraron las efemérides que a continuación se describen.

7 de junio, Día de la Libertad de Expresión

La libre manifestación de las ideas es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos instrumentos internacionales de los cuales México pertenece.

La libertad de expresión consiste en el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio. El ejercicio de este derecho debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públi-

cas. El derecho a la libertad de expresión debe ser respetado por todos y protegido por el Estado.

El día 8 de junio del año en curso, en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, la CEDH conmemoró, junto con representantes de los diversos medios de comunicación en dicha región, el Día de la Libertad de Expresión a través de la realización de una mesa redonda con el tema «Comunicación y derechos humanos en la perspectiva del interés público».

La mesa redonda fue presidida por la M.D. Nohemí Quirasco Hernández, Presidenta de la CEDH, quien al inicio de las actividades pidió guardar un minuto de silencio para recordar a las víctimas periodistas y comunicadores muertos en función de sus labores durante el año 2008.

En el mismo sentido, el día 12 de junio la Presidenta de la CEDH se reunió con los comunicadores de la capital del estado, en las instalaciones de las oficinas centrales de este Organismo estatal.

Esta celebración es una oportunidad para reflexionar acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación en la difusión de los derechos humanos, así como de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los periodistas en su labor de informar que fortalece al Estado democrático.

9 de agosto, Día de las Poblaciones Indígenas

En el año de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el «Día Internacional de las Poblaciones Indígenas» a conmemorarse el día 9 de agosto de cada año. El objetivo de la conmemoración es seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que afrontan las poblaciones indígenas en esferas tales como: la cultura, educación,





salud, derechos humanos, medio ambiente, desarrollo económico y social.

Los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Los miembros de pueblos indígenas tienen derechos humanos individuales, como personas y colectivos como pueblos. Entre los principales docu-

mentos jurídicos en los que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la organización internacional del trabajo OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El día 6 de agosto, en el municipio de Papantla, Veracruz, la CEDH conmemoró con las poblaciones indígenas de la región, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, mediante un evento en el que la M.D. Nohemí Quirasco Hernández, planteó la situación que guardan los derechos

humanos de los pueblos indígenas en el estado.

Al evento asistieron el Alcalde Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, así como asociaciones civiles de la región. Se contó con la participación de la presidenta de la organización LIMAPAKSIN A.C., quien expresó desde la perspectiva de las OSC la situación de los indígenas del totonacapan.

Como una demostración de la riqueza indígena se contó con la participación artística en lengua indí-

gena totonaca de un grupo de niños indígenas de la Escuela Primaria Bilingüe «Miguel Alemán», de Papantla, Veracruz.

La conmemoración de esta fecha sirva como espacio de reflexión sobre las acciones que cada uno de nosotros puede realizar, desde su propio ámbito de actuación, para mejorar las condiciones de vida de los miembros de pueblos indígenas y contribuir así a su desarrollo pleno.



28 de agosto, *Día Nacional de las y los Adultos Mayores*

En México, desde 1983 se celebra el «Día Nacional del Anciano». Esta celebración surgió a raíz de que se conmemoró la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento en 1982. Fue en 1998 cuando se instauró como Día Nacional en todo el país y en el 2002 la celebración retomó el término utilizado por la ONU de «adultos mayores».

Son derechos de las y los adultos mayores: la educación, servicios de salud, seguridad, respeto a su dignidad e integridad, autonomía, autorrealización, participación, vivienda, desarrollo, trabajo, equidad y protección entre otros.

La familia tiene obligaciones hacia la persona adulta mayor, entre las que destacan: otorgar alimento, fomentar la convivencia familiar cotidiana y evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o violencia.

El día 2 de septiembre, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la CEDH en coordinación con la organización «Apoyo Voluntario a Colonias de Xalapa, AVAC, A.C.», celebraron el Día Nacional de las y los Adultos Mayores con 240 personas adultas mayores pro-



venientes de las colonias: Naranjal, Tierra y Libertad, La Lagunilla, Lomas de Sedeño, El Manantial, Carolino Anaya, Rafael Hernández Ochoa, Revolución, Vasconcelos, La Nacional, Culturas Mexicanas, Plan de Ayala y Campo de Tiro.

En el evento la M.D. Nohemí Quirasco Hernández, Presidenta de la Comisión Estatal, impartió una conferencia sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores, así también la Mtra. María Elena Martínez Villegas, Presidenta de la organización AVAC A.C. dirigió a nombre de quienes integran la asociación un mensaje alusivo a dicha conmemoración.



Asimismo se contó con las participación de la señora María Lobato Sánchez, integrante del grupo de la 3ª edad «Las adelitas», quien recitó la poesía «La 3ª edad» y posteriormente se contó con la colaboración de artistas de la Dirección de Arte y Cultura del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, quienes cantaron y amenizaron durante el convivio que AVAC ofreció a los asistentes.

El evento finalizó con la entrega de regalos a las adultas y adultos mayores presentes, quienes pasaron un momento de alegría y agradecieron a cada uno de los que hicieron posible este festejo.

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

Para avanzar en la tarea de construir una cultura de respeto a los derechos humanos es necesario contribuir en la capacitación de los servidores públicos encargados de garantizar el respeto de los mismos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, está realizando diversas acciones de capacitación con el objetivo de prevenir las violaciones de derechos humanos. Durante el período que comprende los meses de abril, mayo y junio del año en curso se

realizaron actividades de capacitación dirigidas a custodios, policías, ministerios públicos y policía ministerial, maestros, servidores públicos municipales, militares, médicos y abogados.

En el mes de julio la M.D. Nohemí Quirasco Hernández, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inauguró el curso «Derechos Humanos y servidores públicos» que impartió personal de esta CEDH a custodios del reclusorio de Pacho Viejo, del municipio de Coatepec, Veracruz,





blica en los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Oluta, Texistepec, El Higo, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Castillo de Teayo, Tlacotalpan, Cotaxtla, Chacaltianguis, Camarón de Tejeda, Misantla, Juchique de Ferrer, Jilotepec, Coatepec, Zongolica, Texhuacán, Mixtla de Altamirano, Tlaquilpa, Xoxocotla, Atlahuilco, Tequila, Los Reyes, Rafael Delgado, Zongolica, Acayucan, Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Jaltipan.

En los meses de abril y junio, se realizaron actividades de capacitación dirigidas a Agentes del Ministerio Público Inves-

por solicitud de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

En los meses de abril, mayo y junio, se impartieron talleres de capacitación con el tema «Seguridad Pública y Derechos Humanos» dirigidos a elementos de la policía intermunicipal y de seguridad pú-

tigadores, Itinerantes y policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como a Agentes del Ministerio Público Militar en los municipios de Orizaba, Zongolica y Xalapa a través de las conferencias: «Garantías Individuales de la Constitución Política de los Esta-





En los meses de abril, mayo, junio y julio se impartieron a diferentes cuerpos militares las conferencias que se describen: «Cateos y visitas domiciliarias ilegales»; «Implicaciones legales por actos violatorios a derechos humanos», y; «Derechos humanos, detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública», dirigidas a militares del 83° Batallón de Infantería en La Boticaria, Veracruz, así como a militares de la SEDENA con sede en El Lencero (municipio de Emiliano Zapata), Martínez de la Torre y Perote, Veracruz.

dos Unidos Mexicanos», «Derechos humanos y funciones de la CEDH» y «Funciones de la CEDH y su vinculación con la PGJE».

En el mes de abril, se impartieron cursos de capacitación en educación y derechos humanos dirigidos a profesoras y profesores del nivel básico de los municipios de Papantla y Córdoba.

En los meses de mayo y junio, se impartieron pláticas de capacitación en derechos humanos dirigidas a servidores públicos municipales de los municipios de San Andrés Tlalnehuayocan, Jalcomulco, Tenochtitlán, Ixcatepec y Nautla.



En los meses de abril y junio, se capacitó a personal médico y de enfermería del Hospital General de la zona no. 11 del IMSS y de la zona de Poza Rica, Ver., así como a promotoras de salud del DIF Municipal de Coatzacoalcos, Ver., a través de las conferencias con el tema «Derechos Humanos y VIH/SIDA».

En el mes de abril, la CEDH participó en el «Ciclo de Conferencias: Abril Mes de los Niños» que organizó la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Veracruz, Ver., a través de la impartición de las conferencias «Menores infractores» y «Derechos de la niñez en el ámbito nacional e internacional».



MÁS CERCA DE TI

Contribuir en la difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos es una tarea de todos y por ello la Comisión Estatal de Derechos Humanos dentro de sus principales funciones realiza diversas actividades de difusión en escuelas, municipios y localidades del estado de Veracruz, mediante conferencias, pláticas, visitas, módulos de atención y difusión, así como a través de los diferentes medios de comunicación que brindan sus espacios a este Organismo estatal.

Durante el período que comprende los meses de abril, mayo, junio y julio del año en curso se realizaron las actividades siguientes:

En el mes de abril, se instalaron módulos de atención de quejas y difusión en derechos humanos, en los municipios de Papantla, Ciudad Isla, Coatzacoalcos, José Azueta, Playa Vicente, José Rodríguez Clara, Chicontepec y Zontecomatlán, así como en la comunidad La Cerquilla perteneciente al municipio de San Juan Evangelista.

En el mes de abril, se realizaron visitas de información y difusión acerca de los derechos humanos y los servicios que brinda la CEDH dirigidas a diversos sectores de la población, pertenecientes a las localidades de; Zacate Limón (municipio de Espinal), El Ermitaño (municipio de Espinal) y Gildardo Muñoz (municipio de Papantla), así como en los municipios de Zontecomatlán, Benito Juárez, Tlachichilco, Texhuacan y Veracruz.





CBTIS y universidades; en los municipios de Papantla, Coatzacoalcos, Hueyapan de Ocampo, Veracruz, Xalapa, Emiliano Zapata, Los Reyes y Zongolica.

En los meses de abril, mayo, junio y julio se informó a la sociedad veracruzana acerca de los servicios que presta la CEDH y de las recomendaciones que emite a través de los espacios que brindaron los diferentes medios de comunicación de prensa, radio y televisión en los municipios de Xalapa,

En los meses de abril, mayo y junio, se impartieron pláticas de difusión dirigidas a estudiantes y padres de familia, sobre: «Derechos y compromisos de las niñas y los niños»; «Prevención de la violencia en el noviazgo»; «Derechos Humanos y funciones de la CEDH»; «Los derechos humanos contra la violencia familiar»; «Derechos humanos y prevención del VIH/SIDA», y; «Derechos humanos y prevención de la violencia en la escuela» en estancias infantiles, escuelas primarias, secundarias, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos, IVEA,



Papantla, Chicontepec, Pánuco, Tuxpan y Veracruz.

Algunos de estos medios son: Radio Papantla, RTV, Diario Opinión Huasteca, Voces de Veracruz, Diario Debate de Pánuco, Televisa, La Jornada, Periódico Imagen, Revista Fundamentos, Radio Veracruz, Diario de Tuxpan, Noreste y Mundo de Poza Rica, Periódico La Razón de Tampico, entre otros.

VINCULACIÓN CON OSC

Las asociaciones civiles constituyen un aliado estratégico para la CEDH en la promoción y defensa de los derechos humanos, por ello mantiene vinculación con ellas y se realizan actividades de manera conjunta. Durante el período comprendido por los meses de abril, mayo, junio y julio se realizaron las actividades siguientes.

En el mes de julio se impartió en el municipio de Tierra Blanca, Ver., el taller «Derechos humanos, los valores del compromiso con la sociedad y cultura cívica» en el que estuvieron presentes ciudadanía y servidores públicos municipales del H. Ayuntamiento de Tierra Blanca, por invitación de la organización «Comité de la Cuenca de los Derechos Humanos Paz y Justicia para Todos A.C.»

En el mes de junio la M.D. Nohemí Quirasco Hernández, Presidenta de la CEDH impartió en el municipio de Alvarado, Ver., la conferencia magistral «Derechos Humanos de los Adultos Mayores» dirigida a personas adultas mayores, jóvenes y público en general, por invitación de la Asociación Civil «Con Visión para el Futuro A.C.» y «La Casa del Pensionado» de dicho municipio.

En los meses de abril, mayo y junio se sostuvieron reuniones de trabajo y vinculación con un total de 41 Organizaciones de la Sociedad Civil de los municipios de Boca del Río, Veracruz, Papantla y Xalapa.





**UNA MUESTRA
DE LO QUE
HACEMOS**

Ver nos *derechos humanos*

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2009 *
PERIODO MARZO - JULIO

Primera Visitaduría General y Dirección de Seguimiento y Conclusión de la CEDHV

AUTORIDAD RESPONSABLE	DERECHOS VIOLADOS	RECOMENDACIÓN (ES)
Presidente Municipal de Córdoba	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad física y al trato digno (lesiones y malos tratos durante la detención) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 21
Secretario de Seguridad Pública en el Estado	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal (detención y retención ilegal), legalidad, seguridad jurídica, integridad física y trato digno (lesiones y malos tratos durante la intervención y detención) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 22, 23, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 77, 78 y 79.
H. Ayuntamiento de San Juan Evangelista	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la legalidad y seguridad jurídica (limitación del uso de la propiedad o posesión).	No. 26
Presidente Municipal de Agua Dulce	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal, legalidad y seguridad jurídica (detención y retención ilegal) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 27 y 67
		Total = 2

*Para mayor información consultar la página de internet www.cedhveracruz.org.mx

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2009 *
PERIODO MARZO - JULIO

Primera Visitaduría General y Dirección de Seguimiento y Conclusión de la CEDHV

AUTORIDAD RESPONSABLE	DERECHOS VIOLADOS	RECOMENDACIÓN (ES)
Presidente Municipal de Huatusco	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad física y al trato digno (lesiones y malos tratos), libertad personal, legalidad y seguridad jurídica (retención ilegal), y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 28
		Total = 1
Presidente Municipal de Río Blanco	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad física (lesiones y malos tratos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 30
		Total = 1
Procurador General de Justicia del Estado	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14 párrafo segundo 16 párrafos primero, segundo, quinto, séptimo y octavo, 17, 19, 20 apartado b inciso i, y los colaterales 5 párrafo primero, 11, 21 y 22 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la legalidad, debido proceso, el principio de presunción de inocencia (detención y retención injustificadas) y derecho a una justicia expedita, pronta, completa e imparcial (retrasos y dilaciones injustificadas en actuaciones ministeriales), derecho a la integridad física y trato digno (lesiones y malos tratos durante la intervención y detención) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 32, 48, 52, 65, 69 y 80.
		Total = 6



RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2009 *
PERIODO MARZO - JULIO

Primera Visitaduría General y Dirección de Seguimiento y Conclusión de la CEDHV

AUTORIDAD RESPONSABLE	DERECHOS VIOLADOS	RECOMENDACIÓN (ES)
Secretario de Gobierno del Estado	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 18, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad personal, integridad física (lesiones y malos tratos), legalidad, seguridad personal (omisión en la protección de los derechos de los internos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública). Así como los derechos humanos contenidos en la garantía del artículo 4 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad física y salud (omisión de auxilio).	No. 33, 66 y 76. Total = 3
Secretario de Educación de Veracruz	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 3 y 4 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho de integridad personal y derecho al trato digno, derechos de los niños y las niñas (malos tratos, medidas disciplinarias contrarias a los fines y criterios de la educación que atentan contra la dignidad).	No. 34 Total = 1
Presidente Municipal de Alto Lucero	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 19 y 21 de la constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad física (lesiones y malos tratos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 38 Total = 1
H. Ayuntamiento de Agua Dulce	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la justicia pronta y cumplida, legalidad y seguridad jurídica. (negativa del cumplimiento de un laudo).	No. 43 Total = 1

*Para mayor información consultar la página de internet www.cedhveracruz.org.mx

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2009 *
PERIODO MARZO - JULIO

Primera Visitaduría General y Dirección de Seguimiento y Conclusión de la CEDHV

AUTORIDAD RESPONSABLE	DERECHOS VIOLADOS	RECOMENDACIÓN (ES)
Presidente Municipal de El Higo	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal (detención ilegal), integridad física (lesiones y malos tratos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 44 Total = 1
Secretario de Salud de Veracruz	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías del artículo 4 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la salud (deficiente prestación de servicio público de salud).	No. 47 Total = 1
Presidente Municipal de Perote	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal (detención ilegal), integridad física (lesiones y malos tratos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 49 Total = 1
Presidente Municipal de Tequila	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal (detención ilegal), integridad física (lesiones y malos tratos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).	No. 56 Total = 1

*Para mayor información consultar la página de internet www.cedhveracruz.org.mx

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2009*
PERIODO MARZO - JULIO

Primera Visitaduría General y Dirección de Seguimiento y Conclusión de la CEDHV

AUTORIDAD RESPONSABLE	DERECHOS VIOLADOS	RECOMENDACIÓN (ES)
Presidente Municipal de Coatepec	<p>Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la integridad física (malos tratos), libertad personal (detención arbitraria) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).</p> <p>Asimismo se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 16, 17 y 115 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a los servicios públicos, a la seguridad colectiva y a una justicia administrativa pronta, completa e imparcial (omisión para resolver problema de "obra peligrosa").</p>	<p>No. 59 y 68.</p> <p>Total = 2</p>
Presidente Municipal de Pueblo Viejo	<p>Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal (detención y retención ilegal), inviolabilidad del domicilio (allanamiento de morada), integridad física (lesiones y malos tratos) y principios en materia policial (deficiencia del servicio de seguridad pública).</p>	<p>No. 63</p> <p>Total = 1</p>
Presidente Municipal de Santiago Sochiapan	<p>Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la propiedad privada o posesión (ingerencia arbitraria a la propiedad privada o posesión).</p>	<p>No. 64</p> <p>Total = 1</p>

*Para mayor información consultar la página de internet www.cedhveracruz.org.mx

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2009 *
PERIODO MARZO - JULIO

Primera Visitaduría General y Dirección de Seguimiento y Conclusión de la CEDHV

AUTORIDAD RESPONSABLE	DERECHOS VIOLADOS	RECOMENDACIÓN (ES)
H. Ayuntamiento de Xalapa	Se violaron derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 4 y 17 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a un ambiente sano y equilibrado, justicia administrativa pronta, completa e imparcial (omisión en los servicios públicos).	No. 71
		Total = 1
Presidente Municipal de Pánuco	Se violaron los derechos humanos contenidos en las garantías de los artículos 14, y 16 de la Constitución general de la república, consecuentemente el derecho a la libertad personal, legalidad y seguridad jurídica (detención ilegal).	No. 72
		Total = 1
Número total de recomendaciones = 60		



Recomendación por un caso de omisión en la protección de los derechos humanos dentro de un CERESO*

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación dirigida al Secretario de Gobierno del Estado por violación al derecho a la integridad personal, a la legalidad y seguridad personal, en perjuicio de un interno del CERESO de Misantla, Veracruz, cometida por servidores públicos adscritos a dicho Centro de Reclusión.

La mamá del interno manifestó ante esta Comisión Estatal, que su hijo fue objeto de abuso sexual por parte de dos internos del CERESO de Misantla, Veracruz, y a pesar de haber comunicado lo sucedido a los entonces Director y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reclusión, omitieron realizar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de su hijo.

Este organismo llevó a cabo las investigaciones correspondientes y solicitó informes a los servidores públicos señalados como responsables, quienes manifestaron que una vez que tuvieron conocimiento de lo sucedido, se proporcionó la atención médica necesaria al interno, quien nunca manifestó al médico adscrito al reclusorio haber sido objeto de una agresión de tal naturaleza y que además en el certificado médico correspondiente se le diagnosticó dermatitis en la región anal.

Esta CEDH dio a conocer los hechos a la Agencia del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia de Misantla, Veracruz, y acreditó a través de los dictámenes médico y psicológico de los peritos adscritos a dicha Agencia del M.P., que el interno presentó integro y con presencia de desgarro, así como daño psicológico relacionado con los hechos objeto de la denuncia,

asimismo se contó con la determinación del ejercicio de la acción penal que emitió la Agente del M.P. en contra de los internos señalados como responsables de la comisión del delito de violación y violación en grado de tentativa respectivamente, en agravio del interno referido.

Por tal motivo, esta CEDH emitió la recomendación dirigida al entonces Secretario de Gobierno del Estado para que: a) sancionara conforme a derecho al entonces Director y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Readaptación Social de Misantla, Veracruz; b) se iniciara procedimiento administrativo al médico adscrito a dicho centro penitenciario; c) implementara medidas de seguridad a favor del interno, protegiendo y salvaguardando de esta manera su seguridad personal, así como, proporcionar en su favor, tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico necesario que permita restablecer el daño emocional ocasionado con motivo del ilícito de que fue objeto.



* Síntesis elaborada por la Lic. Elba Elena González Fernández, Visitadora Adjunta adscrita a la Primera Visitaduría General de la CEDH.

Recomendación por un caso de arraigo injustificado*

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación dirigida al Procurador General de Justicia en el Estado por violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso, principio de presunción de inocencia y acceso a una justicia rápida y expedita, en perjuicio de un adulto, por parte de servidores públicos adscritos a dicha Procuraduría.

El peticionario manifestó ante esta Comisión Estatal, haber sido detenido y retenido injustificadamente, hechos que atribuyó a elementos de la Policía Ministerial de la zona Veracruz- Boca del Río, así como a personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Luego de realizar una investigación, la CEDH acreditó: 1. Que la entonces Agente del Ministerio Público Investigador actuante, giró oficio de presentación en contra del peticionario, sin cumplir con los requisitos legales para el caso de notoria urgencia y temor fundado de que el presunto responsable pudiera sustraerse a la acción de la justicia, además sin que existieran los indicios mínimos y suficientes de su probable responsabilidad. 2. Asimismo que dicha Agente del M.P. incurrió en irregularidades administrativas, omisiones, dilaciones y atrasos, legalmente injustificados, al tramitar el arraigo del peticionario y solicitar la ampliación del mismo, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz, Veracruz, sin que previamente agilizara con la debida eficacia la práctica y desahogo de las actuaciones y diligencias para la integración de la investigación ministerial.

Por lo anterior este Organismo estatal solicitó al Procurador General de Justicia del Estado que: iniciara procedimiento administrativo de responsabilidad y sancionara conforme a derecho a la enton-

ces Agente del Ministerio Público Investigadora de Alvarado, Veracruz; otorgara una indemnización compensatoria al peticionario por los daños y perjuicios causados, por el tiempo que permaneció arraigado; capacitara en materia de derechos humanos y procuración de justicia a los Agentes del Ministerio Público investigadores y al demás personal que resultara responsable, a fin de que no vuelvan a incurrir en irregularidades, dilaciones y atrasos legalmente injustificados, para la debida integración, determinación y trámite de las investigaciones ministeriales; exhortara a los servidores públicos responsables, para que se abstuvieran de incurrir en lo sucesivo, en conductas y omisiones como las observadas.



* Síntesis elaborada por el Lic. José Luis Pérez Guerra, Visitador Adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de la CEDHV.

Gestoría: cumplimiento de obligaciones ciudadanas*

La Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de la Dirección de Orientación y Quejas, realizó una gestión a favor de una persona quien solicitó el apoyo de este Organismo debido a que en las oficinas de Hacienda del Estado no le habían permitido realizar un pago de derecho vehicular porque su vehículo aparecía registrado como robado.

Personal de esta CEDH verificó ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal el status del vehículo de la peticionaria y confirmó que efectivamente aparecía con reporte de robo, pero, por otra parte, en la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, dicho vehículo reportaba el estatus de recuperado, por lo que a su vez se investigó en la oficina de Hacienda del Estado y la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos, de Xalapa, Veracruz, y se constató que el vehículo en algún momento había sido robado y denunciado el ilícito en alguna agencia del Ministerio Público del estado de México.

Continuando con la investigación, este Organismo obtuvo una copia simple de la solicitud de devolución del vehículo signado por el Agente del Ministerio Público de Texcoco, Estado de México y a través de la colaboración de la CNDH, se requirió información a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por medio del Registro Público Nacional Vehicular, institución que al percatarse del error que existía en el status del vehículo, procedió a modificar el mismo.

Finalmente el Registro Público Nacional Vehicular informó a la Oficina de Hacienda Municipal que el vehículo de referencia se encontraba en legal posesión de la peticionaria y por tanto se podía proceder al respectivo cobro de los derechos vehiculares, por lo que la solicitante pudo efectuar en tiempo y forma sus pagos y agradeció la intervención de este Organismo por la solución de su problema.



* Síntesis elaborada por el Lic. Pedro Eduardo Alcocer Méndez, Visitador Auxiliar, adscrito a la Dirección de Orientación y Quejas de la CEDH.

Orientación Jurídica en un caso de discriminación de género*

La Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de su Delegación Étnica de Papantla, Veracruz dio una orientación jurídica a un señor indígena de la población de Tahuaxni Norte, del municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, quien expresó en su lengua indígena se le orientara si sus hermanas (de extracción indígena), por ser mujeres, tenían derecho a heredar parte de los bienes de su padre quien ya había fallecido.

El peticionario manifestó que promovió un juicio sucesorio, donde sus tres hermanos varones repudiaron la herencia en su favor y sus dos hermanas mujeres no aceptaron rechazarla, situación por la cual pretendió a cambio de la parte de la herencia que les correspondía a sus hermanas, darles una cantidad de dinero y apoyarlas en caso de necesidad, puesto que vivían solas debido a que nunca se casaron.

Cabe señalar que en las comunidades indígenas de la zona norte del estado, existen usos y costumbres que reflejan la violencia de género que ancestralmente padecen las mujeres y que propi-

cian violaciones a sus derechos humanos. Es común que en dicha zona, cuando no hay testamento, a las herederas se les otorguen una mínima cantidad de dinero a cambio de la parte de los bienes que les corresponde, sobre todo si éstos son inmuebles o en su caso se les asignen a ellas los bienes muebles y a los varones los inmuebles. Lo anterior es culturalmente aceptado en las comunidades pues incluso habiendo testamento, es común que el testador se conduzca en el mismo sentido.

No obstante, poco a poco el ejercicio de los derechos humanos se va consolidando también en estas comunidades. En el caso particular, se orientó al peticionario en el sentido de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, incluyendo el derecho a heredar.

Las Delegaciones Étnicas de la CEDH realizan actividades de difusión en las comunidades indígenas sobre temas como: derechos humanos, equidad de género, violencia familiar, derechos de los niños y las niñas, entre otros.



* Síntesis elaborada por el Lic. José Luis Hernández Galicia, Delegado Étnico de la CEDH en Papantla, Veracruz.



APORTACIONES DE INTERÉS

Ver ^{los} derechos humanos

Sistemas de Enjuiciamiento Penal

Ariel Anastacio Cesar Robinson Manzanilla*

SUMARIO: Introducción. 1. Sistema Inquisitivo. 2 Sistema Acusatorio. 3. Medios Alternativos de Solución de Conflictos. 4. Conclusiones. Bibliografía.

Introducción

Nuestro objetivo es conocer las características que destacan a cada uno de los sistemas de enjuiciamiento penal, así como la ubicación del propio sistema de enjuiciamiento penal mexicano en las diversas corrientes. Ello es indispensable para demostrar si el procedimiento oral sumario, establecido en el Código de Procedimientos Penales del estado de Veracruz, realmente lo es y contiene o respeta los principios del sistema acusatorio.

1. Sistema Inquisitivo

El sistema de enjuiciamiento inquisitivo tiene su origen, principalmente, en los sistemas políticos conocidos como imperios con determinadas características que trataremos de describir, siendo la principal la demostración del poder del Estado sobre sus gobernados. Sin embargo, ante las diferentes culturas en las que se adoptó, ha tenido algunas variaciones para hacerlo más inquisitivo, demostrando así, el poder en turno su hegemonía o pretendiendo darle un sentido garantista.

Sergio Gabriel Torres, Cristian Edgardo Barrita y Carlos Daza Gómez, comentan sobre el sistema inquisitivo lo siguiente:

El absolutismo propio de los imperios concentró los poderes de la soberanía y, en lo que aquí interesa la Administración de Justicia -la jurisdicción- en una única persona, denotando claramente la primacía del estado sobre el individuo. Bajo sus normas, es el propio Estado (órgano jurisdiccional) quien pone en marcha el proceso penal ante la puesta en peligro de un bien jurídico, bastándole a esta concepción totalitaria, la mera apariencia del delito.¹

Cabe señalar que en el modelo mexicano se le confiere al Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, el monopolio de la acción penal, erigiéndose como la autoridad absoluta en la fase de la investigación ministerial, durante la práctica de las investigaciones que considera necesario realizar para demostrar la culpabilidad de quien es acusado ante su potestad. De esta manera nuestra ley procesal desconoce el principio de presunción de inocencia, ya que la redacción del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales lo confirma al señalar: «Iniciada la investigación ministerial, ésta tenderá a probar el cuerpo del delito en el caso que se indaga, las circunstancias en que fue cometido, la identidad y responsabilidad de quienes participaron en él.»

* Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Licenciado en Derecho por la Universidad Villa Rica de Veracruz. Maestro en Administración de Justicia por la Universidad Autónoma Villa Rica de Veracruz.

¹ DAZA GÓMEZ, Carlos, *Principios generales del juicio oral penal*, Editorial Flores, México 2006, p.3.

Sin embargo, ante la división de poderes no es el «órgano jurisdiccional» el motor de la acción penal, ya que éste solamente será quien juzgue al imputado de la acusación proveniente del agente del Ministerio Público acusador. Así también, dentro del sistema inquisitivo, el ciudadano, o debía o tenía la obligación de cuidar que todas sus conductas tuvieran la apariencia de honestidad, pues en caso de que, por alguna circunstancia, fuera acusado ante el Estado tenía la obligación de probar su inocencia.

Ello se traduce en una de las principales características del sistema inquisitivo que consiste en la negación del principio de presunción de inocencia consagrado en los tratados internacionales. En cambio, el sistema acusatorio sí implementa tal principio, sin embargo, nuestro código sustantivo en su artículo 7, en su parte procesal no lo refleja, al continuar con un proceso escrito e inquisitorial y, sobre todo, que es en la presencia del órgano investigador ante quien comúnmente declara primeramente el acusado, y en muchas de las ocasiones sin asistencia de un defensor debidamente capacitado.

Mateo Oronoz al comentar en su obra² sobre el sistema inquisitivo, hace referencia al conflicto de intereses que en toda contienda legal y sobre todo del orden penal debe existir. Lo que resulta evidente pues aún y cuando la víctima u ofendido no es parte en dicho proceso, es representada por el agente del Ministerio Público, el cual tratará en todo momento que se respete el estado de derecho establecido por el Estado, y en segundo término, que los derechos violentados de las víctimas sean restaurados en su totalidad y que el acusado reciba el castigo respectivo; el imputado tendrá la obligación de demostrar su inocencia, cuando en un proceso garantista la fiscalía debe demostrar la culpabilidad. Y el Estado con esto, perseguirá restablecer el orden social y jurídico.

En nuestro procedimiento penal podemos encontrar que el agente del Ministerio Público, en la etapa de investigación ministerial, de alguna manera es juez y parte al ser él quien determina qué pruebas se deben recabar para probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien es acusado ante su potestad, no teniendo éste último posibilidad alguna de defensa. Asimismo, ante el juez, el procedimiento se seguirá de manera escrita frente a los encargados de las mesas de trámite y no ante el juzgador quien, en muy pocas ocasiones, sale de su despacho a presenciar las diversas audiencias que se llevan a cabo por los secretarios encargados de las mismas.

Si bien en nuestro proceso penal se observan varias de las características del enjuiciamiento inquisitivo³, al paso del tiempo, ante el reclamo social y debido a un acuerdo más político que jurídico, se le han ido proporcionado tanto al imputado, como a la víctima, más posibilidades de intervención directa en el procedimiento. Incluso ésta última tiene capacidad para ofrecer pruebas directamente respecto de la reparación del daño, así como objetar algún auto que vulnere su derecho a recibirla sin la intervención o coadyuvancia del agente del Ministerio Público.

En las más de las ocasiones, se transgreden flagrantemente las garantías individuales del acusado en muchos de los expedientes penales que se integran en el Estado de Veracruz ante el órgano investigador. Todavía observamos la designación oficiosa por parte del Ministerio Público de «persona de su confianza» para esgrimir la defensa de quien es acusado, y ésta resulta ser un empleado de la misma agencia o hasta un elemento de la policía ministerial. Como éste, desafortunadamente, todavía se pueden identificar muchos de los errores del sistema inquisitorio ante dicha autoridad. La Santa Inquisición es tal vez el más claro ejemplo de un sistema inquisitivo, dado que desde su origen en el imperio romano se castigaba a quien

² ORONOS SANTANA, Carlos M., *El Juicio Oral en México y en Iberoamérica*, Editorial Cárdenas Velasco editores, México 2006, pp., 268-269.

³ Al imputado se le concibe como un objeto de persecución penal y no como sujeto de derecho; el interés del Estado prevalece sobre el interés de los particulares; en un mismo órgano se encuentran reunidas las facultades de investigación y de juzgamiento; la fase de instrucción constituye el centro del proceso penal, el juzgador puede delegar funciones en funcionarios subalternos; la instrucción se desarrolla en forma secreta; es por escrito.

se consideraba hereje no concediéndole defensa. Al evolucionar este sistema y llegar a su cúspide, son los Papas quienes la regulan y es bajo el mandato de Inocencio IV que se autoriza a los inquisidores a imponer, no sólo la incomunicación sino la tortura como medio para arrancar, a quienes resultaban acusados de herejía o brujería, su confesión. Posteriormente, eran juzgados en tribunales que dirigían tres sacerdotes seculares normalmente sin conocimientos de derecho, y un defensor que solamente indicaba a su defendido el procedimiento y la admisión de sus crímenes.

Como se puede observar, la principal característica del enjuiciamiento inquisitorio es la concentración de funciones en donde un sólo órgano es, a su vez, el encargado de investigar el delito y resolver sobre la intervención de quien es acusado del mismo. En este sentido, nuestro código procesal sirve como ejemplo al señalar en su artículo 278 que:

El juez o tribunal reconocerá el valor de las pruebas aportadas a la investigación ministerial, si se practicaron con apego a este Código y no fueron desvirtuadas por otras desahogadas en el período de instrucción. En este último caso, manifestará las razones para negar valor a una prueba admitida en la investigación mencionada y que el Ministerio Público consideró apta para sustentar el ejercicio de la acción penal.

Pareciera, según la redacción del numeral reseñado, que no se le concede valor preponderante a las pruebas recabadas por el Ministerio Público en la investigación ministerial, al poder ser desvirtuadas por las pruebas presentadas por la defensa en la etapa de instrucción. Sin embargo, en su segunda parte obliga al juzgador a realizar un especial razonamiento del por qué no le concedería valor a dichas probanzas, lo que no señala para las pruebas de la defensa, concediéndole así al Ministerio Público, la suplencia de la queja cuando se trata de un órgano técnico jurídico o, al menos, eso se afirma.

2. Sistema Acusatorio

El sistema acusatorio es propio de los sistemas políticos liberales y democráticos. Podemos observar sus raíces tanto en la Grecia democrática como en la Roma republicana. En ellas se pretendía establecer que el individuo fuera libre y protegido por la propia ley. Este sistema, fundamentalmente propone que el individuo es inocente hasta en tanto se justifique su culpabilidad, para ello, se necesita definir, con claridad y precisión a los órganos del Estado que estarán encargados de la verdadera procuración y administración de justicia, de acuerdo con los principios de un juicio acusatorio y oral, y a su vez establecer la función de cada uno de ellos. Sobre todo, que el Estado, de alguna manera, no sea el rector y propietario del proceso del cual hablamos.

El juicio oral es tan antiguo como lo hemos mencionado, es más, existen dentro de la propia Biblia, ejemplos de que la nación israelita y los hijos de Judea lo practicaban como en Roma y en Grecia. Por ejemplo, el juicio que se instaura en Roma a Jesús regido por Pilatos lo ejemplifica claramente. Otro claro ejemplo lo podemos observar en el famoso juicio que realiza el Rey Salomón cuando llegan ante él dos mujeres reclamando la maternidad de un recién nacido, porque el hijo de una de ellas había muerto en el parto. Una vez recibiendo



das las declaraciones de las madres, el Rey decide que se corte a la mitad al bebé y se le da a cada una de ellas la mitad. Ante esta circunstancia, una de las madres declara que prefiere que su hijo viva con otra madre a que muera, razón por la que el juez decide entregarle a esta madre el recién nacido. En tales juicios ya se pueden observar los principios de un verdadero proceso acusatorio, adversarial y oral, pues ante los juzgadores declaran quienes se dicen ofendidos y los acusados, como en el caso del juicio de Jesús. Asimismo, se observa la inmediación, porque tales pruebas son recibidas ante el juez; la contradicción, porque a su vez las partes son las que tienden a demostrar su verdad; y por último, la publicidad, dado que son juicios abiertos a toda la sociedad.

El sistema oral del que venimos hablando, sobre todo ha sido implementado por Inglaterra con base a su sistema político, y lo ha llevado a todas y cada una de sus colonias siendo adoptado principalmente por los Estados Unidos de Norte América. De este sistema, se puede decir lo siguiente:

- a. Prevalece la palabra a la escritura, la comunicación con el Juez y con las partes es oral.
- b. El proceso se desahoga en forma rápida en una o más audiencias sucesivas, en presencia del Juez.
- c. El juez en la audiencia recibe las pruebas personalmente.
- d. Va el juez formando su convicción respecto de lo que es la verdad, conforme va avanzando el proceso.
- e. La sentencia definitiva se dicta al concluir la última audiencia.⁴

Es importante resaltar que, ante la oralidad, no solamente el juez de audiencia escuchará de viva voz lo que afirmen: el acusado, el ofendido, los testigos y los peritos que intervengan en dicho juicio. También podrá observar el lenguaje corporal de cada uno de ellos, lenguaje que actualmente y de acuerdo a diversos estudios ha tomado gran relevancia en este tipo de juicios. A través de estu-

dios interdisciplinarios en los cuales peritos, como pueden ser psicólogos y sociólogos empiezan a establecer que dicho lenguaje puede reflejar si quien declara lo está haciendo con verdad, o está ocultando algún hecho, o definitivamente se conduce con falsedad. Con base en lo anterior, y ante la globalización y el reclamo de la sociedad al sistema inquisitorio o escrito totalmente privado y en poder del Estado, en los países de América Latina se ha tratado de implementar los juicios orales.

Como hemos comentado en el proceso oral, si bien el Estado, de alguna manera, tiene la rectoría del procedimiento por tratarse de juicios inmersos en el derecho penal y como consecuencia públicos, son las partes quienes deben enfrentarse en dicho proceso y es por ello que el Estado, y sobre todo en materia de procuración de justicia, debe separar su autoridad sobre el Ministerio Público. Sabido es que éste depende del Poder Ejecutivo, lo cual independientemente de que no sea acorde al juicio oral, es la evidencia de que un sistema es inquisitorio. Por ello, la separación total y definitiva del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, para que éste no pueda ejercer presión alguna sobre casos que se ventilen ante él es necesaria, pero además, las corrientes actuales precisan que todo seguimiento de investigación ministerial, de la cual tenga conocimiento el Ministerio Público, debe preferentemente seguirse ante el juez de garantías, quien vigilará la legalidad de los actos del órgano investigador y la licitud de las pruebas ofrecidas.

Esta prueba lícita es otra de las características de un sistema acusatorio pues, para que pueda ser tomada en consideración en la audiencia de desahogo por el juez que la presida -que debe ser distinto al de garantías-, debe analizar que sea proveniente de un hecho lícito, ya que si la prueba ofrecida no es obtenida lícitamente, esta carece de valor y eficacia jurídica.

A su vez, se ha discutido sobre la conveniencia de que en un proceso acusatorio existan diversos jueces. Varias de las corrientes, entre ellas las de Sudamérica, han optado por crear jueces de garantías o instructores, que son aquellos que reci-

⁴ KELLEY HERNANDEZ, Santiago A., *Teoría del derecho procesal*, Editorial Porrúa, Cuarta Edición, México 2003, p. 35.



ben las investigaciones del Ministerio Público, sea con detenido o sin detenido, y previo estudio de las mismas, obsequian en el primer caso, la orden de captura o presentación correspondiente, y en el segundo, el auto de vinculación a proceso, abriendo un período para el ofrecimiento y recepción de pruebas. Sin embargo, no puede desahogar las mismas, pues este juez simplemente se ciñe, después del auto de vinculación, a recibir las pruebas que anuncien las partes analizando la legalidad o moralidad de las mismas y posteriormente, se turnan al juez de audiencia, quien señalará fecha para el desahogo de las mismas.

En la audiencia de desahogo de pruebas se deben respetar los principios de: oralidad, inmediación, concentración, contradicción y publicidad, y es el momento en que el juez tendrá contacto con las partes y las pruebas a recibir, no estará «contaminado» por la fase de instrucción. Asimismo, en algunos de los países que han acogido este sistema, se pretende o se ha creado el juez de ejecución de sentencia, el cual se caracteriza porque no ha tenido contacto alguno con todo el procedimiento. Sin embargo, tiene la facultad y obligación de vigi-

lar el debido cumplimiento de la sentencia emitida, y en su caso, la posibilidad o no de otorgar beneficios a los sentenciados.

3. Medios alternativos de solución de conflictos

Otro de los aspectos en que se distinguen los procesos orales es su clara tendencia a que, tanto al inicio del mismo como en la propia audiencia, puedan las partes acudir a los medios alternativos de solución de conflictos: mediación, conciliación y arbitraje.

El procedimiento de mediación, se distingue porque las partes son guiadas por un tercero para llegar a una solución⁵. Sin embargo, éste no será quien defina el procedimiento de mediación, las partes tienen una intervención en forma conjunta con un tercero quien debe ser un experto en la materia sobre la que versa el problema, y debe ceñirse exclusivamente al problema de los particulares. En tal método alternativo de solución de conflictos resulta que no existe ni un ganador ni un perdedor, dado que es evidente que, al llegar a un acuerdo, ninguna de las partes sentirá agravio alguno, puesto que ellas son las que designarán el lugar y la forma en donde deban verificarse, y por último, se distingue tal método por que el cumplimiento del acuerdo al que se llegue debe ser voluntario.

La conciliación puede definirse como el procedimiento que se verifica entre las partes, quienes designan a un tercero que adquirirá el nombre de conciliador y que tratará de ponerlas de acuerdo en el conflicto que se presente, principalmente, para evitar que se acuda a otro tipo de procedimiento ya sea jurisdiccional o arbitral.

⁵ GARBER, Carlos A., *La mediación funciona*, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 1996, p.10.

Como podemos observar, en la conciliación, las partes ceden en la solución del conflicto aunado a que este método es anterior y pretende evitar la iniciación de cualquier tipo de procedimiento, de igual manera, la solución pretende satisfacer a los particulares que acuden a la misma sin ser vinculante y el cumplimiento es voluntario.

Debemos ser cuidadosos en cómo deben implementarse los métodos alternativos de solución de conflictos, cuando las partes en conflicto quieran acudir a la conciliación, la mediación o al arbitraje en el proceso oral, dado que, como se presenta en nuestra reforma, pudiera suceder que la pretensión de solucionar el conflicto a través de estos medios, resultara contraria al espíritu de la mediación, porque simple y sencillamente el artículo 282 fracción IX, establece la posibilidad de que el juez que dirige la audiencia pública oral, antes del inicio de la misma o durante ésta, llame la atención a las partes para resolver el problema a través de estos medios.

Lo delicado es cómo se dará en la práctica lo prescrito por este artículo en el sentido de que al aceptar las partes los métodos alternativos de solución, el juez las remitirá ante la autoridad competente, declarando, de ser posible, concluido el juicio oral iniciado. Y surgen diversas interrogantes: de no llegar a un acuerdo ante el centro de mediación ¿podrá abrirse de nueva cuenta el juicio oral?, de llegar a un acuerdo y establecer la forma de resolverlo ¿ante qué juez en caso de incumplimiento se reclamar el mismo? Cualquier solución que se de a un problema que se esté ya ventilando en la audiencia oral, tendría que ser reclamado en un juicio diverso.

Por ello, consideramos que sí es necesario que se implementen los métodos alternativos de solución de conflictos, pero de forma debida, en un procedimiento acusatorio adversarial. Debidamente regulado en el procedimiento, los métodos alternativos, tendrían fuerza vinculante y se facultaría al juez de audiencia para ejecutar los mismos a fin de satisfacer a las partes en conflicto.

Pues bien, es evidente que nuestra legislación deja abierta muchas puertas, para efecto del posible incumplimiento de un arreglo, ya que consideramos en lo particular que, de no existir acuerdo, no

puede volver a iniciar el juicio oral, pues se rompería el principio de concentración en el que se establece que en una audiencia deberán recibirse todas las pruebas y de ser posible emitir la sentencia. Asimismo, consideramos que no podrá pedirse al juez del juicio oral, la ejecución del incumplimiento de cualquier convenio que se celebrara ante las autoridades encargadas de la mediación, puesto que el juez dio por concluido su proceso y en consecuencia, la parte agraviada tendría que acudir a un diverso orden, que pudiera ser el civil, para reclamar el cumplimiento de lo convenido.

Es claro, que ante tan novedosas figuras jurídicas, no solamente debemos alertarnos por la implementación de un sistema acusatorio oral, si no también, porque evidentemente traerá como consecuencia una reforma estructural. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instruye a los estados de la república para que en un lapso no mayor a ocho años implementen tales sistemas, dicha reforma debe acompañarse, a su vez, de una reforma al sistema penitenciario, pues en el momento actual el sistema penitenciario mexicano evidencia una problemática en su esquema procesal acusada de corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos, etc.

Hemos afirmado en muchas ocasiones, que la implementación e instauración de juicios orales en el Estado mexicano debe acompañarse de una reingeniería jurídica, en la cual deben no solamente reformarse códigos penales, códigos procesales y leyes orgánicas del Poder Judicial, también, deben implementarse reformas educativas, capacitación de jueces, secretarios, agentes del Ministerio Público, peritos y de los abogados defensores tanto de oficio como particulares.

4. Conclusiones

Podemos entonces concluir que el sistema acusatorio presenta innumerables beneficios, sobre todo a favor de los justiciables, primordialmente al respetar el principio de presunción de inocencia, y si bien se habla de mayor celeridad en los juicios orales, ésta evidentemente dependerá del presupuesto que asigne cada Estado para la creación de jueces, agentes del Ministerio Público, defensores y todos aquellos relacionados con la celebración de los mismos, habida cuenta que ante el cúmulo de

expedientes radicados en el estado de Veracruz, deberá efectuarse un estudio detallado para establecer la cantidad de salas orales y funcionarios que lo desarrollarán.

En tal sentido, ciertamente dicho principio es avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dar preferencia a las primeras declaraciones, así como a las pruebas recabadas en la investigación ministerial, bajo el criterio de que al ser rendidas ante un órgano técnico jurídico, pero sobre todo ser más cercanas a la realización de los hechos, deben prevalecer sobre cualesquiera otras en donde quien la realiza tuvo oportunidad de aleccionamiento. Este criterio puede ser fácilmente cuestionado, dado que en muchas ocasiones, las confesiones vertidas ante el órgano investigador son resultado de coacciones físicas y morales, ya que aún y cuando actualmente se niegue la incomunicación, todavía existe la presencia de la misma, lo que evidentemente restaría valor a dicha declaración. Sin embargo, la Corte, continuando con el sistema inquisitorio, refiere en diverso criterio que la coacción debe estar debidamente probada y que en todo caso, si existiera una prueba que demostrara que la primera declaración fue obtenida a través de coacción, ésta podría ser motivo de que se acusara a la autoridad que la desplegó, pero no restarle valor a la misma, lo que consideraríamos totalmente inaceptable de encontrarnos en un proceso acusatorio.

Fácilmente cualquier sociedad apostaría por el sistema acusatorio, dado que acorde a su estructura teórica y práctica, pudiera afirmarse que es aquél que garantiza, tanto para quien resulte acusado como para la víctima, el respeto de sus derechos humanos, así como al debido proceso penal que se encuentra matizado, principalmente, por el principio de presunción de inocencia, aunado a la oralidad, intermediación, contradicción, concentración y publicidad. Estos principios debidamente empleados, pueden garantizar una correcta aplicación de la ley, ya que al practicarse cualquier investigación ante la presencia del acusado, defensa, agraviado, fiscal y juez de garantías o instrucción, se evita que un órgano del estado (Ministerio Público) sea juez y parte; aunado a que al separarse las funciones del órgano jurisdiccional (juez de garantía y juez de audiencia) se evita que entre en contacto con el agraviado, fiscal, defensa, acusado y prejuzgue sobre el caso.

Consideramos que el desahogo de pruebas ante el juez de audiencia resulta conveniente, ya que éste a través de sus sentidos (intermediación) aprecia las mismas, dando oportunidad a las partes de defender su posición en igualdad de condiciones (contradicción), y que al excepcionarse en dicha audiencia (concentración) el juzgador podría valorar adecuadamente ante la inminencia de las mismas.

Sin embargo, la implementación del sistema acusatorio debe llevarse con ciertas reservas, pues surgen cuestionamientos que deben resolverse como: ¿existen en México las condiciones sociales para implementarlo? ¿Se cuenta con los recursos económicos para solventar la estructura? ¿Se encuentran los órganos del Estado encargados de su aplicación? ¿Los acusados contarán con una defensa adecuada? Es claro que no. Podríamos engrosar fácilmente los cuestionamientos plasmados, y concluir con el que consideramos debe ser el que encabece la lista ¿garantizará en México el sistema acusatorio, el respeto a los derechos humanos de quien se vea inmerso en un procedimiento penal?

Bibliografía

DAZA GÓMEZ, Carlos, *Principios generales del juicio oral penal*, Editorial Flores, México 2006.

GARBER, Carlos A., *La mediación funciona*, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 1996.

KELLEY HERNANDEZ, Santiago A., *Teoría del derecho procesal*, Editorial Porrúa, Cuarta Edición, México 2003.

ORONÓZ SANTANA, Carlos M., *El Juicio Oral en México y en Iberoamérica*, Editorial Cárdenas Velasco editores, México 2006.

Legisgrafía

Código Penal y de Procedimientos Penales de Veracruz, Ed. Cajica, México 2008.

Perspectivas en la relación: Jurisdicción e Inteligencia emocional*

José Francisco Báez Corona**

Sumario: Introducción. 1. Trascendencia de la jurisdicción. 2 La forma en la que el juzgador desarrolla su tarea. 3. Inteligencia emocional y el lado humano del juez. 4. La inteligencia emocional como ayuda para la jurisdicción. 5. Comentario final.

Introducción

En el derecho, tradicionalmente se ha concebido al juez como un funcionario que realiza sus actividades en forma totalmente objetiva, alguien que es capaz de liberarse de todos los prejuicios y emociones que influyen en su práctica para basarse únicamente en lo que reporta la ley y el expediente.

El contexto externo a la práctica judicial, las experiencias personales del juzgador, lo que ocurrió en su vida esa mañana antes de llegar a la oficina, son vistos como algo de lo cual se despoja para analizar cada caso sólo con base en su racionalidad lógica.

Sin embargo, los avances en psicología, neurología y otras áreas han llevado hoy en día a ver la inteli-

gencia como algo integral que abarca tanto la parte lógica como la emocional entre muchas otras. Las operaciones mentales y emocionales se encuentran biológicamente ligadas a nivel cerebral. Reflexionar sobre las implicaciones de esta cuestión en la práctica judicial es el objetivo de las siguientes líneas.

1. Trascendencia de la jurisdicción

El concepto de jurisdicción es aplicable de manera exclusiva a las actividades del Poder Judicial del Estado, como lo menciona Arroyo: «En nuestro derecho la jurisdicción corresponde en lo general a los Tribunales; pero en lo particular a cada juez, magistrado o ministro, es decir, a aquel que juzga».¹ Véscovi coincide con ello cuando menciona: «La jurisdicción corresponde hoy a uno de los tres poderes: al Poder judicial».² En el mismo sentido,

* Este artículo se presenta como parte de las reflexiones incluidas en la tesis doctoral titulada: *Jurisdicción e inteligencia emocional: Estudio de caso en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz*. Vaya desde aquí un agradecimiento a la tutora de esa investigación la Dra. Miriam de los Ángeles Díaz Córdoba.

** Doctor en Derecho Público, Maestro y Especialista en Docencia Universitaria, Licenciado en Derecho y en Pedagogía. Labora como docente en distintas instituciones particulares de educación superior y en la Universidad Veracruzana.

¹ Arroyo Moreno, Jesús Ángel; «El juez», En *Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, Núm. 22, México, 1993, p.39.

² Véscovi, Enrique; *Teoría general del proceso*, Themis, Colombia, 1984, p. 664.

Carnelutti opina que la jurisdicción es: «La fórmula más simple y clara del mundo: existen partes, hay litis, debe haber un juez, el cual juzga de qué parte está la razón».³

Por lo tanto, la jurisdicción se entiende como la función del Estado, encargada al poder judicial, que consiste en resolver vinculatoriamente los casos concretos que se sometan al conocimiento del juzgador, con base en la aplicación de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico y, en los casos de falta u oscuridad de éste, crear las soluciones que resulten congruentes con los principios del propio sistema.

La función jurisdiccional reviste una importancia total dentro de cualquier grupo social organizado como un Estado, tanto para los ciudadanos como para el Estado en sí mismo.

Siguiendo a Roberto Dormi, puede afirmarse que «la justicia es poder porque los jueces son los guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional y, en consecuencia, custodios de los derechos reconocidos, de las garantías conferidas y de los poderes constituidos».⁴ De ahí la gran relevancia de la función que desempeñan jueces y magistrados. Se constituyen, pues, en los garantes del derecho, mientras que para el propio Estado la trascendencia de la labor judicial se manifiesta en el vigilar la actuación de sus órganos y que todas las actividades públicas se sujeten a los principios contenidos en la Constitución y en las demás leyes estatales.

Como colofón y desglosando estos objetivos primordiales de la jurisdicción, sobre todo en lo que tiene que ver con los particulares, Hufstedler comenta:

Pedimos a los tribunales que defiendan nuestra libertad, que reduzcan las tensiones raciales, que condenen la guerra y la

contaminación, que nos protejan de los abusos de los poderes públicos y de nuestras tentaciones privadas, que impongan penas... que compensen las diferencias entre individuos, que resuciten la economía, que nos tutelen al nacer, que nos casen, que nos concedan el divorcio y, si no que nos sepulten, al menos que aseguren que se paguen los gastos de nuestro funeral.⁵

Todas estas altas actividades, entre muchas otras, son encomendadas a los representantes del poder judicial en cada Estado.

2. La forma en que el juzgador desarrolla su tarea

Jueces, magistrados y ministros no realizan su trascendente labor de manera completamente libre; para ello deben sujetarse a los señalamientos, directrices y límites que marcan las leyes.

En este sentido, García y Menéndez, juristas españoles, comentan que «el papel del juez deberá seguir siendo el de un servidor de la Constitución y de la Ley, en nombre de las cuales habla y de las cuales, y no de ninguna otra fuente mágica, extrae únicamente la fuerza de sus sentencias».⁶

A pesar de lo anterior, puede criticarse que en los hechos reales el juez está ordenado por la ley pero no subsumido bajo de ella. Para aplicar la ley es necesario que sea capaz de ponderar las normas, los hechos y también las emociones inmersas en su práctica jurisdiccional. Se ha escrito mucho «en los últimos sesenta años para mostrar que el funcionamiento del derecho no consiste en una operación de la lógica deductiva o, por lo menos, que no consiste solamente en eso. En muchos lugares (...) eminentes juristas, lo mismo teóricos que prácticos, y de muy diversas escuelas, han sostenido que la vida del Derecho no es un mero asunto de lógica, ni debe serlo».⁷

³ Carnelutti, Francesco; *Derecho procesal civil y penal*, Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Vol. 2, México, 1998, p.50.

⁴ Dormi, Roberto; *Los jueces ¿es la justicia un tercio del poder?*, Ediciones Ciudad, Argentina, 1992, p.. 37.

⁵ Citado por Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patricia; *Los jueces y la política*, (tr. Miguel Ángel Ruiz de Azna), Taurus, España, 1999, p. 15.

⁶ García, Eduardo y Menéndez, Aurelio, *El derecho, la ley y el juez*, Civitas, España, 1997, p.55.

⁷ Recasens, Siches Luis; *Nueva filosofía de la interpretación del derecho*, FCE, México, 1956, p.33.



ción'». ⁸ Y, sin duda, muchas de esas elecciones escapan del mundo estrictamente normativo, pero no de la vida jurídica.

El estilo de razonar, la forma en que los jueces piensan, no ha sido estudiado con la suficiente profundidad, sobre todo cuando se afirma que se basan únicamente en operaciones de la lógica formal, al respecto, Botein comenta:

La ley no prescribe la clase de proceso mental que un juez (...) ha de emplear en la reconstrucción del hecho, con tal de que su decisión se base en la evidencia. Sin embargo, no

será ocioso decir que el proceso en su actual regulación, no sólo es un método racional para evidenciar los hechos, sino que también facilita la exacta percepción que todos nosotros experimentamos como resultado de una súbita, precisa (...) captación del asunto. ⁹

Aunque la deducción lógica a partir de las leyes no le da al juzgador de manera absoluta las respuestas que necesita en su práctica, sí debe proporcionarle los elementos mínimos para ser objetivo y actuar de manera imparcial ante los casos que se le presenten. Para lograr esa objetividad, debe ampliar su conciencia de todos los factores que inciden en su práctica. La estrategia adecuada no es negarlos y decir que la sentencia se resuelve sólo con base en la lógica, sino más bien ser consciente de que la práctica jurisdiccional es también emocional, social, cultural, etc. y, al hacer consciente esas variables y darse cuenta de cómo podrían influir, ser entonces capaces de detectar en qué momento pueden afectar la imparcialidad del juzgador.

A decir de Rafael de Asís, se debe ser consciente de que «la conclusión del proceso va precedida de un conjunto de decisiones que deben ser tomadas por el juzgador. No en balde hay quienes han descrito la decisión judicial como 'situación de elec-

Si bien la ley no prescribe de manera explícita el proceso mental que deben seguir los juzgadores, sí presenta una marcada tendencia a que ese pensamiento sea de orden lógico formal y a que, como describe Botein, exista en la sociedad una percepción de que dicho proceso de pensamiento es objetivo y preciso.

De ahí que existan muchas «creencias que subyacen en la aplicación del derecho; creencias que rodean la función judicial, creencias en las que los jueces creen, aunque no las expliciten. Algunas de estas creencias (...) se oponen entre sí y su descripción arroja fuertes paradojas». ¹⁰ Como la paradoja que

⁸ De Asís, Roig Rafael; *Jueces y normas, La decisión judicial desde el ordenamiento*, España, 1995, p. 219.

⁹ Botein, Bernard; *El juez de primera instancia. Memorias de un juez*, Colofón, México, 1995, p. 49.

¹⁰ Tamayo y Salmorán, Rolando, «Indeterminación del derecho. Las paradojas de la interpretación jurídica», En Malem, Jorge, et al. (Comps.), *La función judicial, ética y democracia*, Gedisa, México, 2003, p. 57.

genera el pensar que el juez, a través de la negación, puede desprenderse por completo de su trasfondo emocional para ser completamente objetivo en su función.

En este sentido, es correcta la opinión de Herrendorf cuando afirma:

Así se advierte claramente que el sentido de las conductas es lo que debe ver y otorgar el juez cuando juzga; y hay que tener presente que el sentido de conductas no siempre es tan simple como un asesinato o un sacrificio, y es por eso que del derecho habilitó conceptos de compleja dilucidación, como los de captación de voluntad, negligencia, malicia, influencia, estulticia, mendacidad, mala fe, y tantos otros.¹¹

En la captación de conductas y en la aplicación de conceptos como los mencionados en la cita anterior, el juzgador tiene necesariamente que echar mano de su inteligencia, pero una inteligencia entendida de manera integral que le permita comprender tanto los aspectos lógicos, como los emocionales, entre muchos otros implicados.

3. Inteligencia emocional y el lado humano del juez

No se debe perder de vista que los jueces son como cualquier ser humano, con todo lo que ello implica, tal como muy claramente lo describe Camuñez en el siguiente fragmento:

Los jueces son seres de carne y hueso. La altísima misión que les está encomendada no anula los condicionamientos y limitaciones propios de todo ser humano. Ciertamente es que sobre ellos pesa la gravísima responsabilidad de decidir sobre los valores más preciados de sus semejantes: la libertad, el honor, la hacienda, incluso la vida, hasta hace unos años. Sin duda, de ahí deriva su aire distante (con las naturales excepciones de

caracteres más receptivos, que los hacen más próximos). Pero, en ocasiones, surge la reacción espontánea del hombre que llevan dentro, incluso en la solemnidad del acto procesal. Por eso no se es menos juez; si acaso, más humano.¹²

Cada juzgador carga, entre otros factores, un enorme peso emocional en su labor, como se comenta en la cita; deciden día con día sobre la libertad, los bienes, el estado de las personas de su comunidad. Sin duda, su labor es importantísima, y es ahí donde entra en juego la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional implica:

- Un aspecto cognitivo: identificar, conocer y comprender las propias emociones y las de otras personas.
- Un aspecto funcional o práctico: operar y expresar las emociones, usarlas de forma intencional¹³.

En razón de lo anterior, se comprende que la inteligencia emocional es una habilidad cognitiva y funcional que permite comprender las emociones propias y ajenas para poder operarlas en beneficio de las personas. Neurológicamente su base es saber vincular el cerebro emocional con el racional, conectar tálamo, amígdala y corteza, hacerlos trabajar en conjunto para proporcionar un bien a la persona.

4. La inteligencia emocional como ayuda para la jurisdicción

La inteligencia emocional puede auxiliar a cada juez y magistrado a mantenerse objetivo, a tratar de seguir fungiendo como un garante de la Constitución y de las leyes, pese a los reproches, remordimientos, súplicas, presiones sociales, carga de trabajo y demás cuestiones con que se encuentra

¹¹ Herrendorf, Daniel; *El poder de los jueces*, Universidad Veracruzana, México, 1992, p. 23.

¹² Camuñez, Ruiz Juan; *La cara risueña de la justicia. Anecdotario del foro hispalense*, Rublan, España, 1985, p. 103.

¹³ Cfr. Goleman, Daniel, *La inteligencia emocional*, Vergara, México, 2004, *Passim*.

cotidianamente, y que como ser humano no puede simplemente negar.

Hay muchas otras condiciones, características de la práctica jurisdiccional, que se convierten en exigencias para la personalidad del jurista y que constituyen requerimientos más sencillos de cubrir si se pone en práctica la inteligencia emocional. En numerosas ocasiones el juzgador debe asumir roles:

«Ser a un mismo tiempo enérgico, como lo requiere la defensa, y cortés como lo exige la educación; práctico como lo pide el litigio y sutil como lo demanda la inteligencia; eficaz y respetuoso; combativo y digno; ser todo esto tan opuesto y a veces tan contradictorio, a un mismo tiempo, y todos los días del año, en todos los momentos, en la adversidad y en la buena fortuna, constituye realmente un prodigio.»¹⁴

Esos papeles, entre otros que debe juzgar el juez y el magistrado, requieren de autocontrol y autoconocimiento para mantener una congruencia de vida, así como empatía y manejo de relaciones para identificar el momento justo en que se necesita cada uno de ellos y, finalmente, automotivación, para mantener la voluntad de actuar así «todos los días del año, en todos los momentos», con lo cual se completa la aplicación de las cinco competencias emocionales básicas.

La referencia de ejemplos en los cuales se deriva la existencia de una relación entre inteligencia emocional y jurisdicción, puede prolongarse. Verbigracia, el pensador McCormick, quien indica una lista de propiedades que deben guiar al juez, además de la capacidad argumentativa y del conocimiento de la ley: «buen juicio, perspicacia, prudencia, altura de miras, sentido de justicia, humanidad, compasión, valentía».¹⁵

Sobre todas estas virtudes, Manuel Atienza, profesor de la Universidad de Alicante, afirma: «dudo que alguien pudiera discutir su pertinencia, aunque seguramente (...) se le ocurriera añadir alguna a la lista».¹⁶ Entre éstas, se encuentran varias que pueden vincularse con una inteligencia emocional desarrollada, tales como la prudencia, el sentido de justicia, la humanidad y la compasión.

Abundando sobre las características o propiedades que son deseables en un buen juez, Lyndhurst sostiene: «Ante todo debe ser honesto. En segundo



¹⁴ Couture, Eduardo; *Los mandamientos del abogado comentados*, Iure, México, 2003.

¹⁵ Citado por Atienza, Manuel; «Virtudes judiciales. Sobre la selección y formación de los jueces en el Estado de derecho», en Carbonell, Miguel, *et al.* (Coords.). *Jueces y derecho, problemas contemporáneos*, Porrúa-UNAM, México, 2004, p. 21.

¹⁶ *Idem.*

lugar ha de poseer una razonable dosis de habilidad. A ello ha de unir valor y ser un caballero. Si añade alguna noción de derecho, le será muy útil».¹⁷ Las características que Lyndhurst describe tienen mucho que ver con una noción moderna de inteligencia, es decir, no enfocada sólo a los aspectos cognitivos sino a la solución de situaciones en general. De ahí que el simple conocimiento de la norma quede relegado frente a otras posibilidades, entre ellas las vinculadas con aspectos éticos y emocionales.

Por su parte, Adolfo Alvarado Velloso, en su obra *El juez, sus deberes y facultades*, describe como deberes funcionales esenciales: independencia, imparcialidad, lealtad, ciencia, diligencia y decoro.¹⁸ Entre esos deberes, la inteligencia emocional está en el trasfondo en el ser independiente, imparcial, diligente y leal.

El destacar la importancia de la prudencia, autocontrol, educación, imparcialidad, diligencia, lealtad o hasta la caballerosidad, como lo han hecho los autores anteriormente referidos, no es casual. Entre los mandamientos del abogado existe uno que reza: «La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueres cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota».¹⁹

Pues bien, es al juez a quien le corresponde ser el árbitro en esa lucha de pasiones, quien también se puede hacer de un enemigo, hasta de dos o más en cada batalla legal, y quien, por ello, puede ir cargando cada día su alma no sólo de rencor sino de muchas otras emociones. Por tal motivo, un buen

mandamiento para los juzgadores podría rezar: «sé inteligente en tus emociones».

«La eterna dialéctica de la vida social es hecha, precisamente, por tales conflictos».²⁰ Al juez le toca vivir en esos conflictos, conocer a quienes están inmersos en ellos, conocer sus pretensiones y tratar de resolverlos.

Una situación que en alguna parte, puesto que sin duda existen otros factores, tiene que ver con el inadecuado tratamiento que se exige a los jueces respecto de su emotividad, son las sentencias contradictorias. En algunas ocasiones, «los tribunales mantienen posiciones distintas respecto del alcance de los textos legales que manejan y de las soluciones que hay que dar».²¹ Al respecto, De Silva comenta:

Para una buena administración de justicia es deseable que entre los diversos órganos jurisdiccionales existan criterios uniformes que, dentro de lo posible, generen seguridad jurídica; ello es lo que justifica el otorgamiento, a órganos judiciales, de facultades materialmente legislativas que se ejercen mediante el establecimiento de la jurisprudencia obligatoria.²²

Esta situación pone en duda la seguridad jurídica de los ciudadanos, puesto que si la base de las resoluciones es la ley y los hechos puestos a conocimiento del magistrado, es difícil explicar que se establezcan posturas opuestas entre tribunales ante casos semejantes.

Alejandro Nieto fija una postura iluminadora al respecto cuando comenta: «el fundamento de la sen-

¹⁷ Citado por Botein, Bernard; *Op cit*, p. 11.

¹⁸ Cfr. Alvarado, Velloso Adolfo; *El juez, sus deberes y facultades*, Depalma, Argentina, 1982.

¹⁹ Couture, Eduardo. *Op. cit.* P. 41.

²⁰ Spota, Alberto: *El juez, el abogado y la formación del derecho a través de la jurisprudencia*, Depalma, Argentina, 1989, p. 29.

²¹ Puigpelat, Martí Francesca, *Funciones y justificación de la opinión dominante en el discurso jurídico*, José María Bochs editor, España, 1994, p. 19.

²² De Silva, Carlos; «La jurisprudencia, interpretación y creación del derecho», En Vázquez, Rodolfo (comp.). *Interpretación jurídica y decisión judicial*, Fontamara, México, 2001, p. 140.

tencia se encuentra no tanto en la ley como en el criterio del juez que la aplica, de tal manera que lo decisivo no es el texto de la ley sino lo que quiere hacer con ella el juez. Siendo iguales los textos y los hechos, ¿Cómo explicar que los jueces lleguen a conclusiones distintas?». ²³

Ciertamente, la sentencia es, a final de cuentas, una decisión, las decisiones se toman en el cerebro, concretamente en la zona de la corteza prefrontal, pero el circuito por el que pasa la toma de decisiones cruza también por el sistema límbico vinculado a las emociones. En pocas palabras, los aspectos emocionales pueden influir en la toma de decisiones ²⁴.

Es por ello que se afirma que la existencia de criterios diversos o incluso contradictorios entre tribunales puede tener que ver con el tratamiento que dan los juzgadores a sus emociones. Pero, al hacer esos aspectos conscientes a través de la inteligencia emocional, este problema podría aminorarse. Al negar las emociones, éstas se quedan en el subconsciente, desde donde su influencia puede ser grande, pero al hacerlas conscientes es posible tratar de neutralizar su injerencia en la imparcialidad del juzgador y con ello hacer un aporte a la seguridad jurídica.

5. Comentario final

Durante muchos años se consideró (hay quienes continúan pensando así), que las emociones, los prejuicios y el contexto sociocultural y político, son como una capa que el juez se podía quitar y dejar colgada a un lado antes de dedicarse a analizar casos sobre los cuales se debe dictar sentencia. Así, «a los jueces se les exigía, por ejemplo, que vivieran en un entorno especial de un aislamiento social casi total (...) les estaba vedada prácticamen-

te toda vida social, no podían tener relaciones amistosas ni asistir a celebraciones tales como casamientos, bautismos, banquetes, etcétera. (...) Cuanto más alejados de las prácticas locales donde ejercían su magisterio tanto mejor». ²⁵

Actualmente, el campo del derecho se debe enriquecer con los aportes de otras disciplinas como la psicología, la pedagogía y las neurociencias, y reconocer que el negar las emociones o apartar a los juzgadores en cajas de cristal no es la manera de hacerlos objetivos y de velar con ello por la seguridad jurídica. La estrategia que se propone, con base en la inteligencia emocional, es desarrollar la conciencia de los juzgadores sobre sus emociones y, con base en ese conocimiento, buscar un actuar imparcial, no negando algo que sin duda existe sino dándole la cara.

¿Se agrega con esto una carga más en el henchido lomo de los jueces? Es que ahora aparte de tener que ser los guardianes del orden jurídico dentro de un país, personas éticas, diligentes, caballeros y todo lo demás que antes se dijo, ¿han de tener que ser emocionalmente inteligentes? ¿Se abona con la inteligencia emocional una característica más a exigir al ideal, casi inalcanzable, que constituye el retrato del juzgador?

La intención de este trabajo obligaría a responder en forma negativa a todas esas preguntas. La inteligencia emocional debe ser vista como una herramienta para el juzgador. Metafóricamente, debería ser entendida más como un báculo que le sirve de apoyo que como una carga que pesa sobre sus espaldas.

Se trata de una capacidad que todo ser humano posee potencialmente, que es posible desarrollar-

²³ Nieto, Alejandro y Fernández, Tomás Ramón; *El derecho y el revés. Diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces*, Ariel, España, 1998, p. 97.

²⁴ Cfr. Kandel, Eric y Kupferman, Irving; «Estados emocionales», en *Neurociencia y conducta* (tr. Pilar Herreros de Tejeda Macua, et al.), Pearson, España, 2005, *Passim*.

²⁵ Malem, Señal Jorge F; «¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?» En Carbonell, Miguel, et al. (Coords.), *Jueces y derecho, problemas contemporáneos*, Porrúa-UNAM, México. 2004, p. 35.

la y que puede ser útil en prácticamente todas las esferas de la vida profesional y cotidiana²⁶.

Goleman y Chernnis han afirmado tajantemente: «Los medios para incrementar la inteligencia emocional son infinitos».²⁷ Y, al igual que una gran cantidad de autores, proponen estrategias y modelos específicos que pueden ser de utilidad para ello.

Un buen paso para comenzar a cambiar la manera de pensar de los jueces sería introducir reformas legales que invitarán a transformar la concepción tradicional de racionalidad, como una capacidad limitada a los aspectos lógico-matemáticos, por la noción de inteligencia integral, es decir, definida como la capacidad de resolver situaciones y problemas de todo tipo, entre ellas, el propio aspecto emocional.

Probablemente el espacio más conveniente para abrir la puerta al cambio paradigmático en el pensamiento judicial sería el artículo 14 de la Constitución federal.

Sin embargo, Fix Zamudio afirma con acierto:

Nada se lograría, aún en el supuesto de que pudiesen introducirse en un futuro más o menos próximo, reformas sustanciales en la estructura y funcionamiento de los tribunales mexicanos en todas sus esferas, si previamente no se analiza y se inician modificaciones para superar uno de los aspectos más sensibles y más descuidados de nuestra administración de justicia. Nos referimos a la preparación (...) de jueces, y en



²⁶ Antunes, Celso; *El desarrollo de la personalidad y la inteligencia emocional, Diálogos que ayudan a crecer*, Gedisa, España, 2000. p. 115.

²⁷ Goleman, Daniel y Cherniss, Cary; *Inteligencia emocional en el trabajo. Cómo seleccionar y mejorar la inteligencia emocional en los individuos, grupos y organizaciones* (tr. Miguel Portillo), Kairós, España, 2001, p. 295.



general de los funcionarios judiciales en nuestro país.²⁸

El desarrollo de la inteligencia emocional en el juzgador es, por tanto, una tarea de capacitación, un objetivo que la carrera judicial debe plantearse firmemente para lograr una consecución paulatina.

Dehesa Dávila, al dar algunas recomendaciones para mejorar el razonamiento de los juzgadores, escribió: «una forma efectiva de coadyuvar al perfeccionamiento del razonamiento que emplea a diario el juzgador es, en primer lugar, hacer explícitos los elementos que conforman ese razonamiento».²⁹ Esto concuerda con lo argumentado en este artículo, ya que el juzgador tendría que darse cuenta que dentro de esos elementos se encuentran en ocasiones los emocionales, con los cuales su razonamiento e inteligencia están ligados incluso a nivel biológico cerebral.

El mismo autor continúa afirmando: «es necesario hacer explícitas las operaciones que con frecuencia se realizan de forma implícita o por simple inercia, sin ninguna reflexión en particular».³⁰ Situa-

ción que se presenta frecuentemente con los aspectos emocionales en las sentencias y que pueden resolverse con inteligencia emocional.

Referencias bibliográficas

Alvarado, Velloso Adolfo; *El juez, sus deberes y facultades*, Depalma, Argentina, 1982.

Antunes, Celso; *El desarrollo de la personalidad y la inteligencia emocional*, Diálogos que ayudan a crecer, Gedisa, España, 2000.

Arroyo Moreno, Jesús Ángel; «El juez», En *Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, Núm. 22, México, 1993.

Atienza, Manuel; «Virtudes judiciales. Sobre la selección y formación de los jueces en el Estado de derecho», en Carbonell, Miguel, et al. (Coords.). *Jueces y derecho, problemas contemporáneos*, Porrúa-UNAM, México, 2004.

Botein, Bernard; *El juez de primera instancia. Memorias de un juez*, Colofón, México, 1995.

Camuñez, Ruiz Juan; *La cara risueña de la justicia. Anecdótico del foro hispalense*, Rublan, España, 1985.

Carnelutti, Francesco; *Derecho procesal civil y penal*, Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Vol. 2, México, 1998.

Couture, Eduardo; *Los mandamientos del abogado comentados*, Iure, México, 2003.

De Asís, Roig Rafael; *Jueces y normas, La decisión judicial desde el ordenamiento*, España, 1995.

De silva, Carlos; «La jurisprudencia, interpretación y creación del derecho», En Vázquez, Rodolfo

²⁸ Fix-Zamudio, Héctor; *La administración de justicia*, En Ovalle, Favela José; *Temas y problemas de la administración de justicia en México*, UNAM, México, 1982, p. 134.

²⁹ Dehesa, Dávila. *Op. cit.* P. 153.

³⁰ *Idem.*

(comp.). Interpretación jurídica y decisión judicial, Fontamara, México, 2001.

Dormi, Roberto; Los jueces ¿es la justicia un tercio del poder?, Ediciones Ciudad, Argentina, 1992.

Fix-Zamudio, Héctor; La administración de justicia, En Ovalle, Favela José; Temas y problemas de la administración de justicia en México, UNAM, México, 1982.

García, Eduardo y Menéndez, Aurelio, El derecho, la ley y el juez, Civitas, España, 1997.

Goleman, Daniel y Cherniss, Cary; Inteligencia emocional en el trabajo. Cómo seleccionar y mejorar la inteligencia emocional en los individuos, grupos y organizaciones (tr. Miguel Portillo), Kairós, España, 2001.

Goleman, Daniel, La inteligencia emocional, Vergara, México, 2004.

Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patricia; Los jueces y la política, (tr. Miguel Ángel Ruiz de Azna), Taurus, España, 1999.

Herrendorf, Daniel; El poder de los jueces, Universidad Veracruzana, México, 1992.

Kandel, Eric y Kupferman, Irving; «Estados emocionales», en Neurociencia y conducta (tr. Pilar He-

rreros de Tejeda Macua, et al.), Pearson, España, 2005.

Malem, Seña Jorge F; «¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?» En Carbonell, Miguel, et al. (Coords.), Jueces y derecho, problemas contemporáneos, Porrúa-UNAM, México. 2004.

Nieto, Alejandro y Fernández, Tomás Ramón; El derecho y el revés. Diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces, Ariel, España, 1998.

Puigpelat, Martí Francesca, Funciones y justificación de la opinión dominante en el discurso jurídico, José María Bochs editor, España, 1994.

Recasens, Siches Luis; Nueva filosofía de la interpretación del derecho, FCE, México, 1956.

Spota, Alberto; El juez, el abogado y la formación del derecho a través de la jurisprudencia, Depalma, Argentina, 1989.

Tamayo y Salmorán, Rolando, «Indeterminación del derecho. Las paradojas de la interpretación jurídica», En Malem, Jorge, et al. (Comps.), La función judicial, ética y democracia, Gedisa, México, 2003.

Véscovi, Enrique; Teoría general del proceso, Themis, Colombia, 1984.





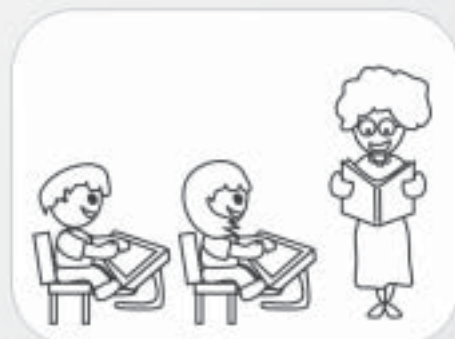
yisophotography

LÚDICA

Vér^{tes} *derechos hermanos*

El Capullo*

Era el primer día de clases para los alumnos de primer año de la maestra Dorita. Los niños estaban contentos pero al final del día había algunos desesperados porque no querían realizar las tareas, unos lloraban, otros se ponían tristes y así sucesivamente. Los padres de familia que observaban aquella escena decidieron intervenir, ¿qué padre no acude en ayuda de su hijo cuando éste lo necesita?, y resolvieron decirle a la maestra que les permitiera ayudar a los niños en tan ardua tarea. La maestra accedió y cuando los padres se encontraban dentro del salón dijo: - Sólo tengo una condición para dejarlos ayudar a sus hijos y esa es que escuchen esta historia:



Un hombre de campo que cuidaba todos los días sus plantas, observó un día que en una de ellas apareció un capullo. Al día siguiente en el capullo apareció una pequeña abertura. El hombre se sentó a observar la abertura de la cual emergía la pequeña cabeza de una mariposa, la observó por horas mientras ella se esforzaba para que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Después de algún tiempo parecía que ella había dejado de hacer cualquier esfuerzo, parecía que ya había hecho todo lo que podía y no había conseguido salir. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa y tomando una tijera abrió el capullo, la mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo marchito, era pequeño y todavía tenía las alas arrugadas.



El hombre observó esperando que en cualquier momento las alas se abrieran y se estiraran para que pudiera volar, pero nada de eso sucedió. La mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose, con un cuerpo marchito.

- Así ustedes señores padres tienen en sus manos el don de decidir, si vuelan por sus hijos o les enseñan a hacer el esfuerzo de aprender a volar por sí mismos, esforzándose por conseguir las herramientas de la educación que les sirvan para tener un mejor mañana. Ese esfuerzo que es tan necesario para que un día, cuando ellos estén listos, salgan de ese capullo llamado hogar y emprendan el vuelo-. Los padres finalmente comprendieron el mensaje, y decidieron dar a sus hijos la oportunidad de esforzarse.



Reflexión del cuento



Instrucciones

Contesta las siguientes preguntas:

¿Por qué era importante que el hombre dejara a la mariposa salir sola de su capullo?

Respuesta: _____

¿Cómo se sintió la mariposa cuando no pudo volar y hacer las cosas por sí misma?

Respuesta: _____

¿Crees que la maestra tuvo razón en contarles ese cuento a los papás?

Respuesta: _____

¿Qué quería decir la maestra con la frase "salgan del capullo llamado hogar y emprendan el vuelo"?

Respuesta: _____

¿Qué debes hacer cuando las cosas no te salgan bien a la primera?

Respuesta: _____

¿Por qué es importante cumplir con tus tareas cada día?

Respuesta: _____